

Bogotá D.C.,

Doctor
JOSÉ OCTAVIO CARDONA LEÓN
Presidente
Comisión Quinta Constitucional Permanente.
jose.cardona@camara.gov.co



Doctor
CAMILO ERNESTO ROMERO GALVÁN
Secretario General
Comisión Quinta Constitucional Permanente
comision.quinta@camara.gov.co

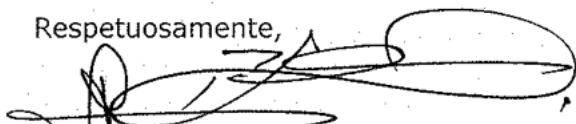
Doctor
JAIME RODRÍGUEZ CONTRERAS.
Coordinador Ponente.
jaime.rodriquez@camara.gov.co

ASUNTO: Concepto Proyecto de Ley No. 085-2023 Senado y No. 458 de 2024 Cámara
"Por medio de la cual se establece el marco de la gestión integral de residuos sólidos, se promueve la producción y consumo sostenible y se impulsa la economía circular"
Radicado Ministerio de Ambiente 24022024E3013933; 2024E1051181.

Respetados Congresistas:

Una vez realizado el análisis sobre el contenido del Proyecto de Ley No. 085-2023 Senado y No. 458 de 2024 Cámara *"Por medio de la cual se establece el marco de la gestión integral de residuos sólidos, se promueve la producción y consumo sostenible y se impulsa la economía circular"*, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se permite presentar los comentarios y consideraciones sobre la iniciativa legislativa en cuestión, de conformidad con las funciones y competencias asignadas a este Ministerio por la Ley 99 de 1993 y el Decreto Ley 3570 de 2011.

Respetuosamente,



MAURICIO CABRERA LEAL

Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Aprobó: Sandra Montoya - Directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana DAASU
Revisó: Laura Isabel Villamizar Pacheco - Coordinadora Unidad de Enlace Legislativo.
Carlos Ramirez - Profesional DAASU
Luis Fernando Ospina Reyes - Asesor DAASU
Lady Roa - Contratista DAASU
Juliana Padrón - Contratista VPNA
Karen Ezpeleta - Contratista VPNA
Elaboró: Carlos Orozco - Contratista DAASU
Slendy Díaz - Contratista DAASU

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

CONCEPTO TÉCNICO DE CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA
Proyecto de Ley No. 085 de 2023 Senado y No. 458 de 2024 Cámara.
"Por medio de la cual se establece el marco de la gestión integral de residuos sólidos, se promueve la producción y consumo sostenible y se impulsa la economía circular"

1. TRAZABILIDAD DEL PROYECTO DE LEY

El Proyecto de Ley No. 085-2023 Senado y No. 458 de 2024 Cámara *"Por medio de la cual se establece el marco de la gestión integral de residuos sólidos, se promueve la producción y consumo sostenible y se impulsa la economía circular"*, fue radicado el 08 de agosto de 2023 por los H. Senadores Miguel Ángel Barreto Castillo, H. S Jaime Enrique Durán Barrera, H.S. Inti Raúl Asprilla Reyes, entre otros. El texto fue aprobado en primer debate en la Comisión Quinta del Senado el 14 de mayo de 2024 y en segundo debate el 19 de junio de 2024, actualmente se encuentra pendiente rendir ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes.

La iniciativa legislativa está conformada por 65 artículos y tiene como objeto, establecer medidas para impulsar la gestión integral de residuos sólidos mediante la prevención, reducción de la generación, reutilización de bienes y productos, el aprovechamiento con participación activa de la población recicladora y la valorización de las diferentes corrientes de residuos para lograr la transición a la economía circular, impulsar la producción y consumo responsable en el país, proteger el medio ambiente y la salud humana y fomentar acciones para enfrentar el cambio climático.

2. ANTECEDENTES NACIÓN - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Marco legal internacional

- Convenio de Basilea sobre el Control del Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación. Aprobado mediante la Ley 253 de 1996.
- Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste. Dispone en su artículo 3.3 *"Las Altas partes Contratantes procurarán que las leyes y reglamentos que expidan para prevenir, reducir y controlar la contaminación de su respectivo medio marino y zona costera, procedente de cualquier fuente, y para promover una adecuada gestión ambiental de éstos, sean tan eficaces como aquellas normas vigentes de carácter internacional"*. Aprobado por Colombia mediante la Ley 45 de 1985.
- Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe. Dispone en su artículo 7 *"Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio causada por la evacuación de desechos en las zonas costeras o por descargas provenientes de ríos, estuarios, establecimientos"*.

costeros, instalaciones de desagüe o cualquiera otras situadas en sus territorios". Aprobado mediante Ley 56 de 1987.

- Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD)- Decisión 15/4 adoptada por la Conferencia de las partes en el Convenio Sobre la Diversidad Biológica- Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming- Montreal. En particular, las siguientes metas:

Meta 7: Reducir para 2030 los riesgos de contaminación y el impacto negativo de la contaminación de todas las fuentes a niveles que no sean perjudiciales para la diversidad biológica y las funciones y los servicios de los ecosistemas, considerando los efectos acumulativos, entre otras cosas: a) reduciendo al menos a la mitad el exceso de nutrientes que se liberan al medio ambiente, como por ejemplo mediante un ciclo y un uso más eficientes de los nutrientes; b) reduciendo el riesgo general de los plaguicidas y las sustancias químicas altamente peligrosas al menos a la mitad, incluido mediante la gestión integrada de plagas, basándose en la ciencia, teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y los medios de vida; y c) previniendo, reduciendo y procurando eliminar la contaminación por plástico.

Meta 16: Garantizar que se aliente y apoye a las personas para que elijan opciones de consumo sostenible, entre otras cosas mediante el establecimiento de marcos de políticas, legislativos o normativos de apoyo, mejorando la enseñanza y el acceso a información pertinente y precisa y alternativas, y, para 2030, reducir la huella mundial del consumo de manera equitativa, entre otras cosas reduciendo a la mitad el desperdicio mundial de alimentos, reduciendo significativamente el consumo excesivo, y reduciendo sustancialmente la generación de desechos, a fin de que todas las personas puedan vivir bien en armonía con la Madre Tierra.

Normas marco Nacional.

Constitución Política de Colombia

Conforme al artículo 8° de la Constitución Política es deber del Estado y de los particulares proteger las riquezas naturales de la Nación. Los artículos 79 y 80 ibidem consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.

Ley 2811 de 1974, el Código Nacional de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente, estableció como factores que deterioran el ambiente, la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables, así como la acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios.

Ley 99 de 1993 en su artículo 5°, estableció entre otras funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las siguientes:

"-2. Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural;

10. Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales;

14. Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades económicas;"

La **Ley 1444 de 2011** escindió el antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en dos nuevos ministerios: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estos ministerios fueron reorganizados con objetivos y funciones específicas, de acuerdo con los Decretos 3570 y 3571 de 2011. El Decreto 3570 establece los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mientras que el Decreto 3571 definió los del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

De conformidad con lo establecido en **Decreto 3570 de 2011**, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene competencias para diseñar y promover estrategias ambientales en sectores productivos y de servicios para mejorar la competitividad y productividad. Además, se encarga de implementar políticas ambientales, definir criterios de evaluación del impacto ambiental y promover el uso de tecnologías limpias para proteger los recursos naturales. También desarrolla políticas ambientales específicas para áreas urbanas y apoya la innovación tecnológica para mitigar los efectos ambientales negativos de las actividades económicas, entre otras.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, conforme al **Decreto 3571 de 2011**, tiene la responsabilidad de formular y coordinar políticas y planes en áreas como la vivienda, el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, el uso del suelo, el agua potable y el saneamiento básico. También monitorea los recursos del Sistema General de Participaciones para agua y saneamiento, y establece criterios para la viabilidad de proyectos de infraestructura relacionados. El ministerio también brinda asistencia técnica a entidades territoriales y a prestadores de servicios públicos domiciliarios, asegurando que se cumplan los requisitos técnicos para garantizar la calidad del servicio.

Normas relevantes en el marco de la gestión de residuos

Referente a la gestión integral de residuos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lideró la formulación del **CONPES 3874 de 2016**, conocido como la Política

Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, cuyo objetivo es implementar una gestión de residuos sólidos que abarque aspectos sociales, económicos, ambientales y sanitarios, contribuyendo al fomento de la economía circular, el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.

Para lograr lo anterior, la Política establece estrategias como la promoción gradual de una economía circular mediante el diseño de instrumentos de gestión de residuos, fomento a la cultura ciudadana, la educación, la innovación para prevenir y reutilizar residuos y asegurar su correcta separación en la fuente.

Así mismo, desde esta cartera se han incorporado instrumentos para la creación de un entorno institucional que facilite la coordinación eficiente entre los diferentes actores involucrados en la gestión de residuos y la implementación de acciones destinadas a mejorar el reporte, monitoreo, verificación y divulgación de la información sectorial, garantizando así el seguimiento efectivo de esta política pública.

TIPOLOGÍA DE RESIDUOS

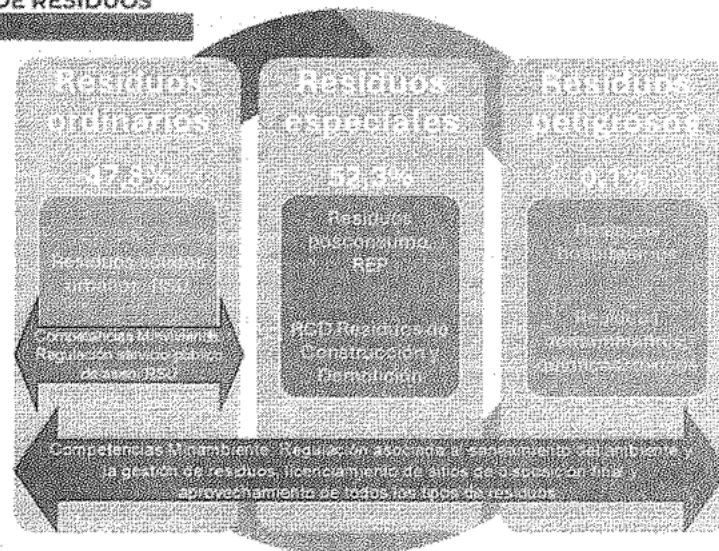


Ilustración 1 Tipología y competencia regulatoria de los residuos en Colombia

Instrumentos para Gestión de Residuos Ordinarios, Peligrosos y de Manejo Diferenciado regulados bajo el principio de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)

Estos instrumentos conforman un marco normativo que asigna a los productores la responsabilidad de gestionar los residuos generados al final de la vida útil de sus productos. Su objetivo es promover la recolección, aprovechamiento y disposición adecuada de residuos, incentivando prácticas sostenibles en los sectores productivos y protegiendo el medio ambiente. A continuación, se desglosan los instrumentos específicos para cada tipo de residuo y su implementación bajo el principio de REP.

Gestión de los Residuos Peligrosos

Respecto a la regulación ambiental en materia de residuos peligrosos, la **Ley 253 de 1996**, por la cual se adopta el Convenio de Basilea sobre el Control del Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación. Esta ley tiene como objeto ratificar el Convenio de Basilea, comprometiendo a Colombia en la regulación y control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, asegurando su manejo ambientalmente racional.

La **Ley 430 de 1998** asignó al Ministerio de Medio Ambiente la competencia expresa para reglamentar los residuos peligrosos. Competencia que fue ratificada por el artículo 6 de la **Ley 1252 de 2008** en los siguientes términos: *"El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentará el contenido de la presente ley y podrá definir como residuos o desechos peligrosos aquellos que contengan otras sustancias, elementos o compuestos diferentes a los precedentes, bajo criterios complementarios o concurrentes para su clasificación."*

La **Resolución 0372 de 2009** modificada por la **Resolución 361 de 2011**, establece la obligación de implementar Planes de Gestión de Devolución de Productos específicamente para baterías usadas de plomo-ácido. Esto incluye desde la recolección y el transporte seguro hasta la disposición final de las baterías, en conformidad con los principios de la gestión integral de residuos peligrosos.

La **Resolución 1675 de 2013**, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, establece los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas. Esta resolución busca garantizar que los fabricantes e importadores de plaguicidas formulen e implementen planes adecuados para la recolección, acopio y gestión de los residuos generados por el consumo de plaguicidas, incluyendo envases, empaques y embalajes contaminados.

El **Decreto 1076 de 2015** por la cual se compila las regulaciones existentes en materia ambiental en Colombia, incluyendo aspectos relacionados con la gestión integral de residuos peligrosos. Este decreto unifica diversas disposiciones reglamentarias, entre ellas las referentes al manejo de residuos peligrosos, con el objetivo de prevenir su generación y regular su manejo adecuado.

El 21 de abril de 2022, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia aprobó la **Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y su Plan de Acción 2022-2030**. Esta política actualizó la versión de 2005 y busca fortalecer la gestión integral de los residuos peligrosos (RESPEL) en el país, reconociendo las necesidades de los diferentes grupos de interés y la problemática ambiental asociada a su generación y manejo, con el fin de proteger el ambiente y la salud humana, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

Instrumentos para movimientos transfronterizos de residuos

Resolución 851 de 2022: Por la cual se desarrollan los artículos 2.2.7A.1.3, 2.2.7A.2.1, el numeral 3.1 del artículo 2.2.7A.2.2, el numeral 3 del artículo 2.2.7A.2.4, el artículo 2.2.7A.4.2 y el artículo 2.2.7A.4.4 del Título 7A del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones.

Instrumentos normativos en residuos especiales

La **Resolución 472 de 2017**, modificada por la **Resolución 1257 de 2021**, establecen las disposiciones para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), aplicables a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan de RCD en el territorio nacional.

La **Resolución 1326 de 2017**, por medio de la cual se establecen los **Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas**, con el fin de prevenir y controlar la degradación del ambiente.

La **Resolución 0803 de 2024**, la cual desarrolla parcialmente las disposiciones de la Ley 2232 de 2022, estableciendo medidas para la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso, y adopta otras disposiciones relacionadas con la gestión de residuos de envases y empaques y productos plásticos de un solo uso.

Responsabilidad Extendida del Productor (REP)

En el marco de la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se implementaron los programas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para residuos ordinarios, siguiendo las recomendaciones de la OCDE. Estos programas buscan fomentar la reutilización y el aprovechamiento de materiales, así como incentivar mejoras en el diseño de productos. La REP exige que los productores, fabricantes e importadores que introducen productos en el mercado asuman la responsabilidad de los residuos generados, estableciendo canales para que los consumidores puedan devolverlos al final de su vida útil.

Por otro lado, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), en respuesta a compromisos internacionales, como el Proceso de Marrakech sobre consumo y producción sustentable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), formuló la Política de Producción y Consumo Sostenible en 2010. Esta política busca transformar los patrones de producción y consumo hacia la sostenibilidad, contribuyendo a la competitividad empresarial, la creación de empleo y el bienestar social.

De esta forma, este Ministerio ha venido expidiendo normas que regulan e implementan la responsabilidad extendida del productor a través de la exigibilidad de planes de devolución posconsumo para fármacos y medicamentos vencidos (Resolución 371 de 2009), baterías usadas plomo ácido (Resolución 372 de 2009), y plaguicidas (Resolución 1675 de 2013).

En materia de implementación de la responsabilidad extendida del productor, el Ministerio de Ambiente también ha expedido instrumentos normativos como la **Resolución 1326 de 2017** sobre la gestión diferencial de llantas usadas y la **Resolución 1407 de 2018** sobre la gestión de residuos de envases y empaques que fue modificada por la **Resolución 803 de 2024** sobre la gestión posconsumo de envases y empaques y productos plásticos de un solo uso.

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)¹, a los 7 programas de gestión de residuos posconsumo que fueron gestados por la ANDI, se encuentran vinculadas 500 empresas de esta agremiación, y que para el 2025 se llegará a más de 800 mil toneladas de residuos acumulados de plaguicidas, computadores y periféricos, pilas y acumuladores, electrodomésticos, baterías usadas de plomo ácido, llantas usadas y envases y empaques gestionadas desde el inicio de los programas y de una manera ambientalmente adecuada recurriendo a prácticamente todas las "R" de la economía circular tales como: el rediseño, la reutilización (reacondicionamiento, reparación y remanufactura), la recuperación y reciclaje de materiales.

Instrumentos para la Gestión y el Control Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAAE

En cumplimiento del mandato de la **Ley 1672 de 2013** del 19 de julio de 2013: "*Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones*". La cual estableció el marco general de la aplicación del principio de la responsabilidad extendida del productor y determinó que los **RAEE son de manejo diferenciado** y, por tanto, se prohibió su disposición final en rellenos sanitarios; además, que debían gestionarse de acuerdo con las directrices que para el efecto estableciera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De esta forma, se obligó a los productores de los AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos) esto es, fabricantes, importadores, ensambladores o remanufacturadores, a establecer directamente o a través de terceros, en forma individual o colectiva, los sistemas de recolección y de gestión ambientalmente seguro de los residuos de los productos puestos por ellos en el mercado, y que los RAEE recolectados se gestionarán o manejarán priorizando el aprovechamiento y valorización de los mismos y a través de empresas gestoras que cuenten con licencia ambiental para ello.

Así mismo, esta cartera ha venido reglamentando la REP para los AEE mediante el **Decreto 284 de 2018** que adicionó el Título 7A de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE y, recientemente, por medio de la Resolución 851 del 5 de agosto de 2022 "por la cual se desarrollan los artículos 2.2.7A.1.3, 2.2.7A.2.1, el numeral 3.1 del artículo 2.2.7A.2.2, el numeral 3 del artículo 2.2.7A.2.4, el artículo 2.2.7A.4.2 y el artículo 2.2.7A.4.4 del Título 7A del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y

¹ Mencionados en el acto de apertura del 5° Foro de sostenibilidad "Acelerando la descarbonización" de la ANDI celebrado los días 1 y 2 de octubre del 2024.

electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 2023.

Por medio de la **Resolución 0851 de 2022** se establecieron los lineamientos y requisitos que deben cumplir los sistemas de recolección y gestión de RAEE implementados por los productores de AEE y aplicados a todos los AEE de consumo masivo que se comercializan en el país, y se fijaron unos objetivos nacionales de recolección y gestión a largo plazo de los RAEE con base en el principio de la responsabilidad extendida del productor y teniendo en cuenta la vida útil de los aparatos.

Gracias a este desarrollo normativo que se ha adelantado desde el año 2010 con las primeras normas de gestión posconsumo de RAEE y partir de la promulgación de la Ley marco 1672 de 2013, Colombia se ha consolidado como líder en la gestión integral y diferenciada de los RAEE en Latinoamérica. La responsabilidad extendida del productor ha sido ampliamente aceptada por el sector productivo, reconociendo sus beneficios en la reducción del manejo inadecuado de estos residuos y en la creación de un sistema de gestión que impulsa la economía circular en el país, generado empleos, oportunidades empresariales, ingresos a través de la valorización de materiales en el exterior y avances en investigación para el aprovechamiento de estos residuos.

Instrumentos normativos en Economía Circular

La **Política nacional de producción más limpia – 1997**, tiene como objetivo reducir los riesgos para el medio ambiente y las personas, a través de la aplicación de una estrategia ambiental preventiva en los procesos productivos, los servicios y los productos.

La **Política Producción y consumo sostenible 2010**, está orientada a cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo por parte de los diferentes actores de la sociedad nacional, lo que contribuirá a reducir la contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental de los bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes de la competitividad empresarial y de la calidad de vida.

Por su parte, el **CONPES 3874 de 2016**, la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, destacan la reindustrialización, la bioeconomía y la economía circular como ejes fundamentales para la gestión de residuos. Desde 2023, esta cartera trabaja en la actualización de la Política Nacional de Producción y Consumo Responsable, con un enfoque en economía circular, como parte de la hoja de ruta hacia un desarrollo sostenible. Como estrategia transversal, estas políticas han priorizado la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor para la gestión de los residuos generados por los productos que se ponen en el mercado.

El **Estatuto tributario de Colombia** establece incentivos tributarios que promueven prácticas alineadas con la economía circular:

Artículo 255 adicionado por el artículo 103 de la Ley 1819 de 2016, permite a las personas jurídicas descontar de su impuesto sobre la renta el 25% de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente durante el año gravable.

Artículo 424, numeral 7, establece la exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA) para equipos y elementos nacionales o importados destinados al cumplimiento de disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes. Para acceder a este beneficio, es necesario acreditar dicha condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 428, literal f): Dispone que la importación de maquinaria o equipos, siempre y cuando no se produzcan en el país y estén destinados a proyectos de conservación y mejoramiento del medio ambiente aprobados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Instrumentos para Sello Ambiental Colombiano - SAC

Resolución 1555 de 2005, por medio de la cual se reglamenta el uso del Sello Ambiental Colombiano - SAC. Y se establece Mediante esta resolución, se establece el Reglamento de Uso del Sello Ambiental Colombiano, que busca promover productos capaces de reducir los efectos ambientales adversos en comparación con otros de la misma categoría. Esta iniciativa contribuye al uso eficiente de los recursos naturales y garantiza un alto nivel de protección del medio ambiente.

Resolución 542 de 2008, por la cual se establece el procedimiento de autorización a organismos de certificación para otorgar el derecho de uso del Sello Ambiental Colombiano y se dictan otras disposiciones, asegurando que el SAC se utilice de manera adecuada y conforme a los criterios establecidos por la autoridad ambiental competente.

Resolución 1414 del 2012, mediante el cual se crea el Comité Interno del Sello Ambiental Colombiano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo fortalecer la implementación, seguimiento y control del SAC, asegurando su correcta aplicación y promoviendo la mejora continua en la gestión ambiental de productos y servicios certificados.

A continuación, se presenta un resumen de los instrumentos normativos en proceso de elaboración o actualización por parte de Esta Cartera Ministerial en Colombia, los cuales abarca áreas clave de la gestión ambiental, tales como residuos posconsumo, residuos peligrosos, movimientos transfronterizos de residuos y economía circular. Las actualizaciones buscan fortalecer el marco regulatorio en consonancia con las políticas nacionales y compromisos internacionales, promoviendo prácticas sostenibles, la responsabilidad en la gestión de residuos y el desarrollo de una economía circular en el país.

Tabla 1. Instrumentos normativos en proceso

INSTRUMENTOS EN ELABORACIÓN DESDE MINAMBIENTE		
INSTRUMENTO	TEMA	NOTA
INSTUMENTOS PARA GESTION DE RESIDUOS POSCONSUMO		
Residuos peligrosos	Se encuentra en proceso de actualización la Resolución 0372 de 2009 sobre baterías usadas plomo ácido y la Resolución 0371 sobre fármacos y medicamentos vencidos	En curso

	Envases y empaques (plan de reconversión)	
INSTUMENTOS PARA GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS		
Residuos peligrosos	Se encuentra en proceso de actualización el Título 6 del Decreto 1076 de 2015 sobre la gestión de residuos peligrosos-	En curso
	Actualización de marco normativo e instrumentos	En curso
INSTUMENTOS PARA MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS		
	Actualización de marco normativo e instrumentos	En curso
Residuos peligrosos	Se encuentra en proceso de expedición la normativa para regular los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos (lista ambar) entre países OCDE en el marco de la Decisión 266 de la OCDE.	En curso
INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN ECONOMÍA CIRCULAR		
Política en proceso	Producción y consumo responsable con criterios de economía circular	En curso
Hoja de ruta	Actualización de hoja de ruta Estrategia Nacional de Economía Circular ENEC.	En curso

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Si bien el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comparte el interés en fomentar la gestión integral de residuos sólidos y de generar un instrumento que articule las políticas, reglamentaciones, planes y programas de los diferentes Ministerios que tienen competencia sobre estos temas estratégicos, se advierte con preocupación que esta iniciativa sustrae competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en temas como: la gestión integral de los residuos sólidos, la formulación y reglamentación del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIRS), y la coordinación de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos (Artículos 5, 17, 18); sistemas de retorno en zonas turísticas (Artículo 39); responsabilidad extendida del productor (Artículo 55); reglamentación sobre residuos de construcción y demolición (Artículo 57), las cuales se atribuyen al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, modificación que desconoce la capacidad institucional consolidada del Ministerio de Ambiente en esta materia, la eficiencia administrativa y la consistencia de las políticas públicas de esta cartera como se pasará a explicar en detalle y como lo expresó en el mismo sentido el Ministerio de Vivienda a través de concepto al proyecto de ley radicado No. 2023EE0099196 y publicado en la Gaceta del Congreso 1590 de 2023.

Se considera necesario ajustar la iniciativa en el sentido de conservar las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en esta materia. La implementación de los instrumentos normativos señalados en el numeral anterior ha permitido el desarrollo de una gestión y cierre de ciclos de materiales que se constituyen en resultados tangibles frente a las metas de gestión y aprovechamiento establecidas. Esto demuestra la capacidad institucional consolidada de esta cartera, la cual podría verse comprometida por las modificaciones que el proyecto de ley propone. A continuación, se expondrán algunos de los resultados concretos obtenidos en la gestión de esta cartera:

Referente a las cantidades de residuos sujetos a devolución posconsumo que incluye los residuos peligrosos y los RAEE, se tienen los siguientes avances reportados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con base al seguimiento ambiental que le realizan a los Planes de gestión de devolución de productos posconsumo y los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos que estaban regulados al 2023 (la información del año 2023 es parcial pues la evaluación no concluido):

Tabla 2: Informe de gestión Residuos Posconsumo vigencia 2023.

Cantidades de Residuos sujetos a devolución Posconsumo Residuos peligrosos																
CATEGORÍA		Unidades	2010-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
RAEE	Residuos de computadores por disposición	Ton	-	384	1.264	2.128	2.842	3.157	3.202	2.909	3.132	2.919	3.824	3.312,0	46	29.144
	Residuos de pilas y/o acumuladores	Ton	-	73	266	551	285	419	469	568	536	539	641	549,0	655	5.501
	Residuos de baterías	Ton	-	255	563	633	717	743	693	779	817	944	913	1.968,0	355,4	8.552
		Ton	-	5.927,7	10.896,2	27.424,1	39.015,1	47.649,4	41.798,9	60.470,7	74.620,9	57.456,2	64.573	78.962,6	55.523	564.318
RESIDUOS PELIGROSOS	Residuos líquidos de plomo ácido	Ton	12.333,5	15.412,4	16.475,6	21.046,0	23.925,0	26.866,3	30.379,3	32.308,7	32.664,9	35.874,0	26.188	21.435,8	19.376,1	304.248
	Residuos sólidos de plomo ácido	Ton	2.593	2.654	2.647	2.468	2.833	3.503	3.903	3.531	3.075	2.913	2.604	1.214,1	937	35.205
	Residuos de aceites y grasas	Ton	46,9	69,3	112,3	104,5	111,6	131,4	158,4	200,3	250,6	169,7	208,19	218,6	30.924	1.817
		Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247,875	142.326,0	60	390.370
Total año		Ton	15.379,41	24.785,81	32.224,30	54.371,30	69.792,37	82.473,07	80.554,22	100.885,29	115.106,71	90.815,64	946.936,28	248.987,15	58.674,96	1.320.127
Total acumulada		Ton	15.379,41	40.159,23	72.383,64	126.755,32	196.494,05	278.967,12	359.521,34	460.107,13	575.313,84	666.129,48	1.013.065,76	1.262.052,91	1.320.127,47	

Tabla 3. Informe de gestión de residuos Posconsumo primer trimestre 2024

Cantidades de Residuos sujetos a devolución Posconsumo Residuos peligrosos																
		Unidades	2010-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
RAEE	Equilibras de computadores por disposición	Ton	-	384	1.264	2.128	2.842	3.157	3.202	2.928	3.132	2.919	3.824	3.312,0	46	29.144
	Residuos de pilas y/o acumuladores	Ton	-	73	266	551	285	419	469	568	536	539	641	549,0	655	5.501
	Residuos de baterías	Ton	-	255	563	633	717	743	693	779	817	944	913	1.968,0	355,4	8.552
	NP	Ton	-	5.927,7	10.896,2	27.424,1	39.015,1	47.649,4	41.798,9	60.470,7	74.620,9	57.456,2	64.573	78.962,6	55.523	564.318
RESIDUOS PELIGROSOS	Residuos líquidos de plomo ácido	Ton	12.333,5	15.412,4	16.475,6	21.046,0	23.925,0	26.866,3	30.379,3	32.308,7	32.664,9	35.874,0	26.188	21.435,8	19.376,1	304.248
	Residuos sólidos de plomo ácido	Ton	2.593	2.654	2.647	2.468	2.833	3.503	3.903	3.531	3.075	2.913	2.604	1.214,1	937	35.205
	Residuos de aceites y grasas	Ton	46,9	69,3	112,3	104,5	111,6	131,4	158,4	200,3	250,6	169,7	208,19	218,6	30.924	1.817
	NP	Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247,875	142.326,0	60	390.370
Total año		Ton	15.379,41	24.786,81	32.224,30	54.371,30	69.792,37	82.473,07	80.554,22	100.885,29	115.106,71	90.815,64	946.936,18	248.987,15	58.674,96	1.320.045
Total acumulada		Ton	15.379,41	40.159,23	72.383,64	126.755,32	196.494,05	278.967,12	359.521,34	460.207,13	575.313,84	666.129,48	1.013.065,76	1.262.052,91	1.320.045,15	

Fuente informe de seguimiento ambiental a la gestión posconsumo, ANLA 2023

La siguiente gráfica muestra la cantidad de residuos posconsumo que se han gestionado desde el año 2010 hasta el 2023, como resultado de la regulación emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para las ocho corrientes de residuos mencionados anteriormente. En total, se han gestionado cerca de un millón trescientas cuarenta mil toneladas de residuos de una manera ambientalmente responsable.

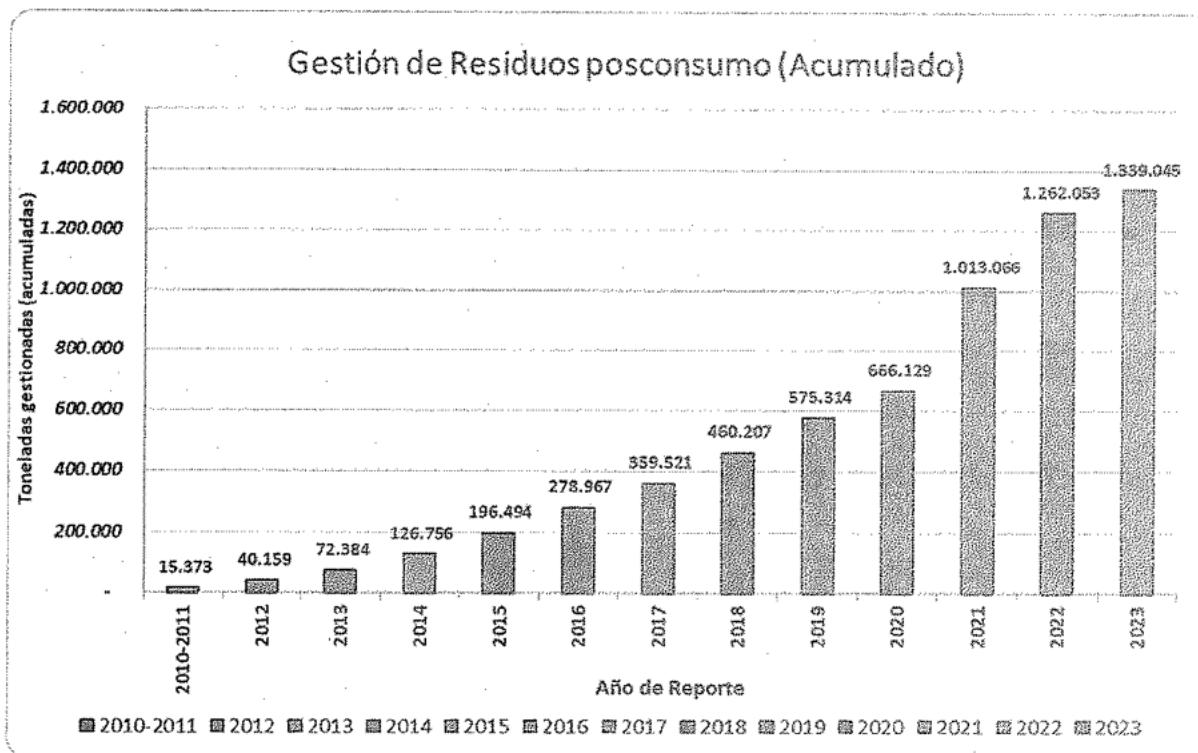


Ilustración 4 Evolución de la gestión de residuos posconsumo en Colombia

Fuente informe de seguimiento ambiental a la gestión posconsumo, ANLA 2023.

De esta forma, en 13 años de aplicación de la regulación de residuos posconsumo peligrosos se han recolectados y gestionado 341.360 toneladas que representaron el 26% del total de residuos recolectados; en cuanto a RAEE en 11 años de regulación se han recolectados y gestionado 43.196 toneladas con una participación del 3% del total; respecto a llantas usadas en los 11 años de regulación van recolectadas y gestionadas 564.318 toneladas que representaron el 42% del total de residuos; y finalmente, en 3 años de aplicación de la regulación de envases y empaques se han recolectado y gestionado 390.170 mil toneladas con una participación del 29% del total de residuos.

En cuanto a la gestión de residuos de envases empaques para el año 2021, primer año de implementación de la norma, reportó una gestión de más de 280.000 toneladas y para el año 2022 el reporte ascendió a las 225.000 toneladas.

En relación con el programa de uso racional de bolsas plásticas de la Resolución 668 de 2016 se evidenció una reducción 71,45% en el 2021, porcentajes obtenidos respecto a la cantidad de bolsas distribuidas en el año base².

Entonces tenemos que, para el quinto año de implementación de la normativa, es decir, para el 2021, se dejaron de distribuir 721'247.921 unidades de bolsas plásticas con

² Informe de Gestión 2022, ANLA.

respecto al 2015 en los 34 distribuidores que presentan datos comparativos para las diferentes vigencias; lo que corresponde a más de 720 millones de bolsas que no tendrán una disposición inadecuada.

Continuando con el Programa de uso racional³ de bolsas plásticas con base en los seguimientos verificados en el año 2023 para la vigencia 2022, se identificó una reducción aproximada del 65% con respecto al 2015, lo cual significa que cerca de 500 millones de bolsas plásticas no fueron entregadas a los consumidores y no fueron dispuestas de forma inadecuada en rellenos sanitarios o cuerpos de agua.

Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Decreto 1784 de 2017 y la Resolución 938 de 2019, permitió la implementación de alternativas al relleno sanitario, como tratamientos biológicos, mecánicos y térmicos, para reducir la presión sobre estos sitios. Además, el Decreto 802 de 2022 y la Resolución 176 de 2020 establecieron incentivos y criterios de elegibilidad para proyectos de aprovechamiento de residuos.

Cabe anotar que desde el año de 1993, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha generado instrumentos articulados con los sectores productivos para mejorar el desempeño ambiental de la industria a través de instrumentos como la política nacional de producción más limpia 1997, la política de producción y consumo sostenible 2010 y en 2019 la Estrategia Nacional de Economía Circular ENEC considerando que tiene las competencias y la capacidad técnica para generar los instrumentos y lineamientos a través de los cuales se promueven acciones de economía circular, y producción y consumo responsable para los sectores productivos y sociedad civil.

Es importante destacar que Colombia es el primer país en Latinoamérica que lanzó la hoja de ruta nacional en economía circular en 2019 y desde su implementación se han tenido importantes avances lo que lo ha convertido en un referente en el tema.

Desde la Dirección de Asuntos Ambientales de Minambiente, se avanza en el diagnóstico y actualización de la Estrategia Nacional de Economía Circular ENEC (Hoja de ruta nacional), identificando flujos y áreas de fortalecimiento articulada con la actualización de la política nacional de producción y consumo sostenible 2010 a través de la formulación de la política de producción y consumo responsable, desde la cual se integran los criterios de economía circular para dar cumplimiento a lo establecido en el plan nacional de desarrollo.

Desde la creación de la ENEC en 2019 uno de los principales logros es la creación del Sistema de información de Economía Circular SIEC a través del cual se realiza la medición y reporte nacional de economía circular. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejerce la secretaría técnica de la mesa de información en economía circular en el comité estadístico de Geografía, medio ambiente, ordenamiento territorial del DANE. A la fecha se han expedido 8 reportes nacionales.

Resultado del avance en economía circular se conformaron la mesa nacional de biomasa residual, la mesa nacional de plásticos y la mesa nacional textil cuya conformación se

³ Informe de Gestión 2023, ANLA.

formalizará a través de un acto administrativo desde Minambiente. Se constituirán adicionalmente las siguientes mesas técnicas: Mesa de metales, Mesa de ecodiseño, Mesa técnica de economía circular en pavimentos e infraestructura.

Otros logros relevantes de la estrategia nacional de economía circular son: la implementación del laboratorio de economía circular del Sena a través del cual se da soporte en procesos de innovación en materiales y gestión de residuos a la industria nacional; la aplicación de incentivos tributarios para la economía circular y la adopción de manera voluntaria de portafolios de financiación para la economía circular y el lanzamiento en 2023 de la guía general de implementación de la taxonomía verde en Colombia liderada por Asobancaria. Así mismo, se han desarrollado programas en economía circular de emprendimiento, escalamiento e innovación a través de Innpulsa, asignación de capital semilla para emprendimientos circulares a través de Cemprende y financiación de proyectos circulares con tasas diferenciadas a través de Bancoldex.

El pasado 8, 9 y 10 de octubre se llevó a cabo el festival latinoamericano de economía circular en las instalaciones de EAN Bogotá, evento al cual asistieron 11 países latinoamericanos, representantes del Foro Económico Mundial, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, Comisión económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Fundación Ellen MacArthur (líder mundial en economía circular), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como país anfitrión y miembro de la Coalición Latinoamericana de Economía Circular. En el marco del festival se emitió la Declaración de Bogotá 2024, esta declaración subraya la importancia de implementar la economía circular como un elemento esencial para preservar y recuperar la biodiversidad, y como una herramienta capaz de reconfigurar los patrones de consumo y producción, enfrentando así los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Todo esto con el fin de promover una cooperación más estrecha entre los países de la región y avanzar hacia un desarrollo resiliente y equitativo. La Declaración fue presentada al mundo en el marco de la COP 16 en Cali.

A continuación, se presentan las observaciones más relevantes al proyecto de ley, las cuales buscan mejorar la coherencia con la normativa vigente y evitar duplicidades o asignaciones inadecuadas de competencias.

4. OBSERVACIONES FRENTE AL ARTICULADO.

ARTÍCULO	COMENTARIO
Artículo 1. Objeto de la Ley. Establecer medidas para impulsar la gestión integral de residuos sólidos mediante la prevención, reducción de la generación, reutilización de bienes y productos, el aprovechamiento con participación activa de la población recicladora y la valorización de las diferentes corrientes de residuos para lograr la transición a la economía circular, impulsar la producción y consumo responsables en el país, proteger el medio ambiente y la salud humana y fomentar acciones para enfrentar el cambio climático.	Se recomienda ajustar el objeto de la ley para que refleje un orden jerárquico claro en la gestión de residuos, empezando por la prevención, reducción, reutilización, reciclaje y valorización energética, dejando la disposición final como última opción.

Artículo 3. Principios. La gestión y manejo de los residuos sólidos se rige por los siguientes principios:

1. Protección a la salud humana y el ambiente. Los actores de la sociedad responsables de la gestión integral de residuos sólidos, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental a la salud humana y el medio ambiente.
2. Gradualidad: Las obligaciones para prevenir la generación de residuos y fomentar la reutilización, promover el aprovechamiento y otro tipo de valorización, y reducir los gases de efecto invernadero, serán establecidas o exigidas de manera progresiva, atendiendo a la cantidad de los residuos, las tecnologías disponibles, el impacto económico y social y la situación geográfica, entre otros factores.
3. Responsabilidad compartida. La planificación y la gestión integral de residuos sólidos es una responsabilidad conjunta pero diferenciada, de todos los actores involucrados en el proceso de generación, gestión, disposición adecuada y producción de residuos sólidos y las actividades que componen la gestión integral de residuos sólidos.
4. Armonización de instrumentos: se deberá garantizar la armonización de las políticas de ordenamiento territorial y de gestión de residuos sólidos, entendiendo el ordenamiento territorial como eje estructurante.
5. Participación y cultura ciudadana: La educación y la participación de la comunidad son necesarios para prevenir la generación de residuos y fomentar la reutilización, la separación en la fuente, el aprovechamiento y la valorización.
6. Información, trazabilidad y transparencia: Los responsables de la gestión integral de los residuos sólidos a nivel nacional, regional y local deberán

Se propone incluir la política de producción y consumo responsable en la armonización de instrumentos del numeral 4°. En el numeral 6° se sugiere incluir la entrega y captura de información para asegurar la trazabilidad. En el numeral 9, se recomienda agregar "producción y consumo responsables" como sombrilla del principio de economía circular.

<p>garantizar el acceso a la información, con la calidad y oportunidad esperada, de manera que la comunidad pueda acceder a la información de manera amplia y transparente.</p> <p>7. Regionalización: Incentivar, cuando sea viable técnica y económicamente, proyectos e infraestructuras regionales para fortalecer las economías de escala y lograr una eficiente gestión de los residuos e impulsar el aprovechamiento, la valorización y el tratamiento, considerando las diferentes corrientes de residuos.</p> <p>8. Estrategias territoriales diferenciales: Se reconoce la necesidad de establecer estrategias diferenciales en el sector, considerando los municipios y regiones, que por características geográficas particulares y de tamaño de mercado, requieren la promoción de esquemas regionales, diferenciables y flexibles, que apoyen a los municipios en su responsabilidad de garantes en la prestación de los servicios públicos y de la gestión integral de residuos sólidos.</p> <p>9. Economía circular. Revolucionar la forma en que diseñamos, producimos y consumimos buscando eliminar residuos y la contaminación; mantener productos y materiales en uso, y regenerar sistemas naturales.</p>	
<p>Artículo 4. Definiciones. Para la aplicación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:</p> <p>(...)</p> <p>Residuos sólidos de manejo especial. Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no es recolectado, manejado, tratado o dispuesto en el marco del servicio público de aseo. Incluye aquellos residuos de los programas de posconsumo, diferentes a envases y empaques y los generados en los procesos productivos, que no son peligrosos, y aquellos que tienen características de gran volumen.</p>	<p>Se recomienda excluir los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de los residuos de manejo especial, ya que su manejo es realmente diferenciado por cuenta de su propia normativa representada en la Ley 1672 de 2013 y los actos administrativos reglamentarios expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así mismo, en la definición de "Responsabilidad Extendida del Productor", se sugiere incluir la etapa de comercialización y asegurar que la disposición final sea la última opción. Esta cartera ha reglamentado lo concerniente a la responsabilidad extendida del productor de estos residuos, los avances regulatorios pueden consultarse en el siguiente enlace https://quimicos.minambiente.gov.co/raee/.</p> <p>Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible se ha generado la regulación y mecanismos de gestión para la responsabilidad</p>

<p>(...)</p> <p>Responsabilidad Extendida del Productor (REP): Principio por medio del cual los productores mantienen un grado de responsabilidad por todos los impactos ambientales de sus productos a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, la producción y la disposición final del producto como residuo en la etapa de posconsumo.</p>	<p>extendida del productor en las siguientes corrientes de residuos: fármacos o medicamentos vencidos, baterías plomo ácido usadas en vehículos de pistón, plaguicidas, llantas usadas, envases y empaques.</p>
<p>Artículo 5. La gestión integral de residuos sólidos en el gobierno nacional. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la entidad rectora de la política nacional de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Las políticas, planes, programas, desarrollos normativos y regulatorios que expida el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberán incluir el análisis y las medidas necesarias para asegurar la articulación y eficiencia desde la perspectiva del servicio público de aseo y las demás corrientes de residuos, a partir de los diferentes sistemas de recolección y transporte, buscando reducir el impacto económico en la población y cumplir las metas nacionales asociadas a la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo el impulso a la comercialización de materiales y subproductos resultados del aprovechamiento y tratamiento.</p> <p>Parágrafo. Los recursos del presupuesto general de la nación necesarios para la implementación de esta política se incorporarán en los presupuestos anuales del Ministerio y demás entidades responsables, acorde con el Marco de Gastos de Mediano Plazo.</p>	<p>Es necesario tener en cuenta que diferentes entidades del orden nacional cuentan con competencias asignadas para regular la gestión de los residuos sólidos ordinarios en diferentes componentes. Así mismo, la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos adoptada mediante el CONPES 3874 de 2016, tiene como entidades responsables al: Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Minas y Energía; Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento; Básico Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Unidad de Planeación Minero Energética.</p> <p>Adicionalmente, no queda claro si el enfoque de toda la ley se centra exclusivamente en el servicio público de aseo. No se especifica cómo se regulará los demás flujos de residuos que no hacen parte de este servicio, especialmente cuando el artículo señala que el Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio será la entidad rectora de la gestión integral de los residuos no peligrosos.</p> <p>Asimismo, es fundamental señalar que este artículo otorga al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, competencias exceden su ámbito tradicional en materia de agua potable y saneamiento. Estas competencias incluyen la promoción de la producción y consumo responsables, la economía circular y el desempeño ambiental de los sectores productivos en el país. Como resultado, se están trasladando competencias propias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la cartera de Vivienda, lo cual, como se indicó anteriormente compromete la capacidad instalada de este</p>

	<p>ministerio y la continuidad de las políticas públicas en esa materia.</p>
<p>Artículo 6. Obligaciones del gobierno nacional para impulsar la producción y consumo responsables y la economía circular. El gobierno nacional deberá expedir, mediante un proceso participativo, la Política Nacional de Producción Consumo Responsables y la Política de Economía Circular dentro de los doce meses de expedida la presente ley, definir incentivos para su implementación y asegurar su actualización, con el apoyo del Consejo Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos previsto en la presente ley"</p>	<p>Es importante tener presente que, de acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, desde el Ministerio de Ambiente se está adelantando el proceso de formulación de la Política Pública de Producción y Consumo Responsable con Criterios de Economía Circular; por lo tanto, se recomienda validar la pertinencia de este artículo, teniendo en cuenta que el objetivo es que en un sólo instrumento se articulen ambos temas: producción y consumo responsable, y economía circular. Por su parte, el artículo sugiere la formulación de dos políticas para temas que son similares lo cual puede generar ineficiencia y reprocesos en trámites administrativos al momento de implementarlos.</p> <p>En el desarrollo del instrumento se ha realizado la evaluación de la política de producción y consumo sostenible y el impacto alcanzado con la ENEC. Se han realizado múltiples sesiones a través de las cuales se avanza en el documento de formulación de la política de producción y consumo responsable integrando los criterios de economía circular.</p>
<p>Artículo 17. Planes de la Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales y distritales para impulsar la Economía Circular- PGIRSM. Los municipios y distritos deberán formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos para impulsar la Economía Circular incluyendo las diferentes corrientes de residuos previstas en la presente ley. Los planes deberán contar con los objetivos, estrategias, programas y proyectos, indicadores, responsables de la ejecución, recursos municipales, así como el cronograma de ejecución, los mecanismos de seguimiento y monitoreo y la evaluación que deberán ser reportados al SINGIRS. Incluirán las metas de aprovechamiento, tratamiento y reducción de gases de efecto invernadero, en concordancia con las metas nacionales, garantizando la articulación con los planes de desarrollo municipal, los planes de ordenamiento territorial y los planes territoriales y sectoriales de cambio climático.</p>	<p>Se recomienda eliminar el parágrafo 4, ya que la gestión de residuos peligrosos (sólidos, líquidos y gaseosos) no forma parte del servicio público de aseo y cuenta con un marco legislativo propio en las leyes 253 de 1996 y 1252 de 2008. También se sugiere que algunos aspectos, como el seguimiento y control, sean objeto de reglamentación. Además, se sugiere ampliar el término para la reglamentación establecido en el parágrafo 3º, a un (1) año, dado el proceso reglamentario existente.</p>

Parágrafo 1. Se deberá hacer seguimiento a la ejecución del Plan, al menos tres veces al año y estos serán evaluados y sus resultados, presentados anualmente al Concejo Municipal y a los órganos de control. Además, deberán reportar los resultados de los indicadores y metas al Sistema de Información Nacional de Gestión de Residuos Sólidos acorde con los procesos e instrumentos que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Parágrafo 2. Los PGIRSM deberán incorporar análisis e implementar soluciones regionales buscando generar economías de escala que beneficien a los usuarios, en especial, frente a la disposición final, tratamiento y aprovechamiento de las diferentes corrientes de residuos, siempre y cuando sea viable dadas las condiciones territoriales.

Parágrafo 3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá reglamentar, a más tardar a los seis meses de expedida la presente Ley, los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales y distritales para impulsar la economía circular, incluyendo las directrices para su aprobación, actualización, seguimiento y evaluación, así como las fechas para su expedición, considerando el Programa Basura Cero creado por la Ley 2294 de 2023; para lo cual deberá tener en cuenta el tamaño de los municipios y los resultados e impacto de los PGIRS formulados en cumplimiento de las normativas expedidas previamente por el gobierno nacional. Así mismo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá estructurar e implementar un plan de asistencia técnica y apoyo a los municipios, con el fin de asegurar la adecuada estructuración de estos planes y sus proyectos, en especial, para los municipios de categorías 4, 5 y 6 definidos en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012.

Parágrafo 4. Para asegurar la articulación de todas las corrientes de residuos en los municipios y distritos, este Plan deberá contemplar un componente de residuos

<p>peligrosos, acorde con la normativa y en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p> <p>Parágrafo 5. Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales o distritales que se encuentren en ejecución a la expedición de la presente ley, continuarán vigentes hasta tanto el gobierno nacional haya expedido la reglamentación y definido los mecanismos de transición hacia los nuevos Planes de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal y Distrital para impulsar la economía circular.</p>	
<p>Artículo 18. Planes y programas de posconsumos. La gestión de residuos posconsumo se basa en el concepto de la Responsabilidad Extendida del Productor — REP, la cual se define como un instrumento que obliga a los fabricantes e importadores de ciertos productos de consumo masivo a organizar, desarrollar y financiar la gestión integral de los residuos derivados de sus productos, una vez el consumidor final los desecha o descarta, a través de programas de gestión de posconsumos.</p> <p>Parágrafo 1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el responsable de reglamentar los instrumentos, mecanismos, procedimientos y obligaciones que deben cumplir los productores y demás actores de la cadena de las corrientes de residuos que se prioricen, asegurando, cuando sea viable, la articulación con el servicio público de aseo.</p> <p>Parágrafo 2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán definir el mecanismo de articulación de las medidas expedidas previamente en el periodo de transición previsto en la presente Ley.</p>	<p>Programas posconsumo: La reglamentación de los programas de responsabilidad extendida del productor (REP) es competencia del Ministerio de Ambiente, según la Ley 2169 de 2021. Asignar estas funciones al Ministerio de Vivienda generaría conflictos y excede las competencias de dicha cartera. Se recomienda ajustar el texto del artículo para reflejar correctamente las responsabilidades.</p>
<p>Artículo 21. Trámites ambientales. Las personas prestadoras del servicio público de aseo y aquellos que realicen la gestión integral de residuos sólidos deberán</p>	<p>El contenido de este artículo ya se encuentra reglamentado en el Decreto 1076 de 2015.</p>

<p>obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que requiera, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá definir, dentro de los seis meses de la expedición de la presente ley, la reglamentación de los requerimientos y trámites ambientales para los proyectos de infraestructura de la actividad de tratamiento de residuos sólidos que impulse la actividad y permita avanzar en el cumplimiento de las metas nacionales.</p>	
<p>Artículo 34. Inclusión de categorización para el otorgamiento del Sello Ambiental Colombiano a productos que hayan sido elaborados con residuos aprovechables o producidos o transformados mediante proceso de aprovechamiento y valorización de residuos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, determinará los elementos requeridos para la categorización de nuevos productos que hayan sido elaborados con residuos aprovechables o producidos o transformados mediante proceso de aprovechamiento y valorización de residuos y sus criterios ambientales para que los mismos puedan aplicar al otorgamiento del Sello Ambiental Colombiano de que trata la Resolución 1555 de 2005.</p> <p>Parágrafo 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ampliará los productos, bienes y/o servicios que hacen parte del Sello Ambiental Colombiano, de acuerdo con la política nacional de crecimiento verde, guía de compras públicas sostenibles y al plan de acción del sello circular verde colombiano, y sus respectivas actualizaciones.</p> <p>Parágrafo 2. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible promoverá estrategias para que las personas naturales independientes, asociaciones o colectivos organizados y organizaciones de recicladores de oficio y legalmente constituidos del esquema operativo de la actividad de aprovechamiento, que cumplan con los requisitos establecidos por</p>	<p>Se precisa que la etiqueta ambiental nacional es el Sello Ambiental Colombiano, que ahora tiene Normas Técnicas Colombianas para 31 productos diferentes, que contemplan dentro de los requisitos para certificación el aprovechamiento de residuos. Por tanto, se deberá revisar la articulación de la propuesta de este articulado con alguna de las certificaciones mencionadas con anterioridad, en este sentido, no se considera viable desarrollar otra etiqueta ambiental.</p> <p>Igualmente es importante mencionar que se está desarrollando un proceso de fortalecimiento que permite su aplicación a nivel internacional.</p>

<p>el gobierno nacional, puedan acceder al Sello Ambiental Colombiano.</p> <p>Parágrafo 3. El certificado del sello circular verde colombiano podrá ser expedido por Mesas Regionales de Economía Circular, las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otros actores ambientales que autorice el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p> <p>Parágrafo 4. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cada año hará entrega de un reconocimiento público a las mejores que logren el mayor volumen de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbanos y contribuyan a la apertura de nuevos negocios verdes a partir de estos mercados.</p>	
<p>Artículo 42. Responsabilidad Extendida del Productor de Envases y Empaques. Los responsables de los Planes de Gestión de Responsabilidad Extendida del Productor deberán informar al Sistema de Información Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, con la periodicidad y reglas que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el volumen de residuos que se gestionan en los municipios y distritos en el marco de la REP, de tal forma se pueda establecer su aporte al cumplimiento de metas municipales y nacionales de aprovechamiento.</p>	<p>Los Planes de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques, son sujetos de seguimiento y control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por lo tanto, por lo que se sugiere que sea esta autoridad la que entregue información al Sistema de Información Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Así las cosas, no debe ser el Ministerio de Vivienda quien defina las reglas del reporte, sino el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p>
<p>Artículo 47. La actividad de tratamiento y valorización de residuos en el servicio público de aseo. Es responsabilidad de los entes territoriales asegurar la prestación de la actividad complementaria de tratamiento dentro del servicio público de aseo, ya sea en su propio territorio o en otra jurisdicción. Para el efecto, podrá participar en la estructuración e implementación de soluciones de carácter regional.</p> <p>Parágrafo 1. Para efectos de la definición de la fórmula tarifaria para la remuneración de la actividad de tratamiento dentro del servicio público de aseo, la Comisión de</p>	<p>Se sugiere precisar el término "asegurar" en el marco de la implementación de actividades de tratamiento y valorización. Estas actividades pueden ser realizadas por actores fuera del servicio público de aseo, lo que requiere un análisis detallado de inversión y operación.</p>

<p>Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberá considerar en el cierre financiero la comercialización y venta de productos y subproductos del tratamiento, así como las diferentes fuentes alternativas de financiación, buscando reducir el impacto en la tarifa que pagan los usuarios del servicio público de aseo.</p> <p>Parágrafo 2. El Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas determinarán los incentivos asociados a la generación de energía y gas a partir de la valorización de residuos sólidos como fuente de energía alternativa. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impulsará el uso y comercialización del compost producto del tratamiento de los residuos orgánicos.</p>	
<p>Artículo 52. De los Parques Integrales de Valorización de Residuos Sólidos - PIVARS. Los rellenos sanitarios deberán migrar a Parques Integrales de Valorización de Residuos Sólidos. Los PIVARS desarrollarán sistemas que promuevan la innovación en la gestión de residuos, la reducción del impacto social y ambiental y el mejoramiento del entorno.</p> <p>Parágrafo 1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá los lineamientos técnicos, los requerimientos ambientales y los mecanismos de financiación e incentivos para el impulso de los PIVARS dentro de los 6 meses de expedida la presente ley. Los rellenos sanitarios deberán contar, 12 meses después de la definición de los lineamientos y cuando sea viable técnica, ambiental y económicamente, deberán contar con un plan para esta migración.</p> <p>Parágrafo 2. Las entidades territoriales deberán incorporar en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos las estrategias y metas para reducir el volumen de residuos que se disponen en los rellenos sanitarios, incrementando el aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos.</p>	<p>El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no tienen dentro de sus competencias expedir requerimientos, solicitar permisos, concesiones o licencias ambientales a las actividades económicas. En virtud con la Ley 99 de 1993, esa es una obligación del Ministerio de Ambiente y Corporaciones Autónomas Regionales.</p>
<p>Artículo 55. De la gestión y aprovechamiento de los residuos de</p>	<p>Lo relacionado con la normativa de responsabilidad extendida del productor y</p>

<p>manejo especial. El manejo de residuos especiales cuyas corrientes de residuos sean priorizadas por gobierno nacional, que incluye, entre otros, textiles, llantas y neumáticos, se realizará en el marco de programas de posconsumo y responsabilidad extendida del productor que reglamente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, siguiendo los criterios establecidos para la jerarquía de la gestión de residuos.</p> <p>Parágrafo 1. En el caso de no contar con programas de responsabilidad extendida del productor, los generadores de estos residuos podrán pactar la recolección y el pago respectivo con prestadores del servicio público de aseo o gestores registrados para el efecto.</p> <p>Parágrafo 2. En el caso de residuos voluminosos y residuos especiales que se dispongan de forma permanente en espacios públicos no autorizados, se deberán definir estrategias municipales de recolección y transporte periódicas y de puntos de recepción, acorde con la caracterización de residuos, en un trabajo articulado entre los municipios, productores, prestadores del servicio público de aseo y organizaciones de recicladores de oficio, definiendo los mecanismos de financiación y los incentivos a la ciudadanía. Esto sin perjuicio de las sanciones a las que están sujetos por la disposición en espacio público no autorizado acorde con los establecido en la Ley 1259 de 2008 y Ley 1801 de 2016.</p>	<p>programas posconsumo se ha expedido por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por tanto, con el propósito de continuar con un ente rector en la materia se considera que otras reglamentaciones que se requieran en la materia se generen desde esta cartera.</p>
<p>Artículo 57. De los residuos de construcción y demolición - RCD. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el responsable de reglamentar la generación, recolección, cargue, transporte, disposición, almacenamiento temporal o permanentemente y/o aprovechamiento de residuos de demolición y construcción, así como de definir responsabilidades e instrumentos, incluyendo sanciones por el</p>	<p>Actualmente existe una regulación sobre los Residuos de Construcción y Demolición expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que define obligaciones para los actores de la cadena, establece la jerarquía para su gestión y asigna metas de aprovechamiento a los grandes generadores de RCD entre el 45 y 70% al 2030 de acuerdo con su ubicación geográfica.</p> <p>El ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución 472 de 2017 y la resolución 1257 de 2021 a través de la cual se modifica la</p>

incumplimiento y la inadecuada disposición de estos residuos en espacios públicos. En la gestión integral de estos residuos se deberán priorizar las actividades de prevención y reducción de la generación, seguida de la alternativa de aprovechamiento y como última opción, la disposición final, siguiendo la jerarquía en la gestión de los residuos, considerando las medidas que aplicarán a los grandes y a los pequeños generadores.

Parágrafo 1. Se establecerán metas nacionales para la recuperación y aprovechamiento de los residuos del sector de la edificación y obras públicas a 2030 y 2040, de acuerdo con los compromisos internacionales del país en materia ambiental. El Consejo Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos definirá metas nacionales de aprovechamiento de RCD acorde con el tipo de generador y tamaño de municipio; en todo caso los grandes generadores deberán, a 2030, aprovechar efectivamente entre el 75% y el 40% en peso del total de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, acorde con la categoría del municipio. Se deberán promover soluciones de tipo regional para su aprovechamiento y disposición final; así los municipios y distritos deberán seleccionar sitios específicos para la disposición final de estos residuos, cuya infraestructura deberán quedar incorporadas en los planes de ordenamiento territorial.

Parágrafo 2. Las metas nacionales y municipales deberán quedar definidas en los planes de gestión integral de residuos sólidos respectivos a partir de una línea base, priorizando, cuando sea viable, soluciones de carácter regional. La información de la línea base, metas, avances y resultados deberá ser reportada por los municipios al Sistema de Información Nacional de la Gestión Integral de Residuos. Esto siguiendo los lineamientos que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Consejo Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

472, por lo tanto, es incompatible asignarle función al Ministerio de Vivienda de regulación de estos residuos que no están dentro del esquema del Servicio Público de Aseo porque los RCD no son un residuo ordinario sino especial. Las medidas preventivas y sanciones son interpuestas por las autoridades ambientales en virtud con artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental.

<p>Parágrafo 3. En el caso de RCD que se dispongan de forma permanente en espacios públicos no autorizados, se deberán definir estrategias municipales de recolección y transporte periódicas y de puntos de recepción, en un trabajo articulado entre los municipios y prestadores del servicio público de aseo, definiendo mecanismos de financiación y los desincentivos a la ciudadanía, promoviendo su aprovechamiento. Para el efecto, se podrán promover asociaciones público-comunitarias que permitan gestionar estos residuos en las zonas urbanas. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a las que están sujetos quienes dispongan estos residuos en espacio público no autorizado.</p>	
<p>Artículo 62. Financiación de la limpieza de los puntos críticos. Los municipios y distritos son los responsables de prestar el servicio de atención a puntos críticos de disposición de residuos en el espacio público, no originados por las deficiencias en la prestación de las diferentes actividades del servicio público de aseo, de manera directa o a través de terceros. Los costos de la limpieza no serán incluidos dentro de la tarifa del servicio público de aseo, pero serán cobrados como un servicio especial por la administración municipal teniendo en cuenta la ubicación y área de influencia de dichos puntos, sin perjuicio de las sanciones que se impongan a quienes dispongan residuos sólidos en sitios y espacio públicos y de las campañas que se adelante de concientización a la comunidad.</p>	<p>Se debe revisar la pertinencia técnica y legal de incluir la gestión de puntos críticos en la tarifa de aseo, ya que los usuarios no son responsables de estos residuos. Incluir esta actividad podría aumentar las tarifas injustamente y desincentivar la eliminación de estos puntos.</p> <p>No se considera conveniente considerando que la gestión de residuos ordinarios es competencia del operador de aseo, en algunas ocasiones los puntos críticos son consecuencia de las deficiencias en la prestación del servicio. La Ley 1801 de 2016 prohíbe el abandono de residuos en el espacio público y esta práctica acarrea multas establecidas en el código de policía, financiar la limpieza de los puntos críticos sería un retroceso.</p>

5. CONSIDERACIONES FINALES

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comparte el interés en fomentar la gestión integral de residuos sólidos y de generar un instrumento que articule las políticas, reglamentaciones, planes y programas de los diferentes Ministerios que tienen competencia sobre estos temas estratégicos. Sin embargo, consideramos que el proyecto de ley requiere cambios estructurales y la incorporación de temas como lineamientos de las políticas ambientales y la Política de Producción y Consumo Responsable con enfoque de Economía Circular que este Ministerio viene adelantando. A su vez, se sugiere considerar las siguientes recomendaciones técnicas:

1. Mantener las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la gestión integral de los residuos sólidos de que trata esta iniciativa, así como en la formulación y reglamentación del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIRS), la coordinación de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, y que estas responsabilidades no se atribuyan exclusivamente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Dichas políticas y acciones deben desarrollarse de manera conjunta, considerando que a esta cartera le compete el desarrollo del marco legal ambiental y particularmente lo establecido en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables adoptado por Decreto Ley 2811 de 1974, así como los lineamientos del desarrollo humano sostenible definidos en la Ley 99 de 1993.
2. El proyecto de ley asigna a las autoridades ambientales funciones relacionadas con la estructuración y financiación de planes y proyectos (artículo 10), las cuales pueden generar conflictos con sus responsabilidades en materia de control y seguimiento de estos mismos proyectos. Se debe considerar que, en principio, estas autoridades no pueden ser juez y parte de la gestión integral de los residuos.
3. El proyecto propone que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamente los instrumentos, mecanismos, procedimientos y obligaciones que deben cumplir los productores y demás actores de la cadena en el marco de los planes y programas de gestión posconsumo, en detrimento de las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con el desarrollo de instrumentos normativos, técnicos y de gestión para el mejoramiento del desempeño ambiental de los sectores productivos y de servicios establecidos en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 3571 de 2011. Algunos de estos instrumentos ya están reglamentados y en implementación desde hace más de 15 años.
4. Es importante mantener la coherencia del proyecto de ley con las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los residuos de envases y empaques y los residuos especiales no peligrosos. Además, se deben excluir residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) debido a que son residuos de "manejo diferenciado" y que cuentan con su propia legislación, así como asignarles una definición propia. Se debe precisar que los residuos de consumo masivo y que generan impacto son susceptibles de aplicación del principio de responsabilidad extendida del productor y que su reglamentación e implementación tiene un ámbito de aplicación más amplio que el definido en la legislación para el ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
5. Se encuentra vigente la regulación emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los Residuos de Construcción y Demolición RCD que define obligaciones para los actores de la cadena, establece la jerarquía para su gestión y asigna metas de aprovechamiento a los grandes generadores de RCD entre el 45 y 70% al 2030 de acuerdo con su ubicación geográfica. Además, esta es una regulación ambiental en cabeza de este Ministerio, por lo tanto, no se justifica la asignación al Ministerio de Vivienda competencias sobre la regulación de estos residuos que no forman parte del esquema del Servicio Público de Aseo. Además, las medidas preventivas y sanciones son ejecutadas por las autoridades ambientales en virtud del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental.

6. Es importante destacar que mediante este proyecto de ley se busca otorgar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, competencias como son la producción y consumo responsable, la economía circular y el mejoramiento del desempeño ambiental de los sectores productivos en el país, las cuales son competencias propias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, excede las competencias y la capacidad institucional del Ministerio de Vivienda, y desconoce el conocimiento, la experiencia, la capacidad institucional del Sistema Nacional Ambiental acumulados durante más de 30 años.
7. Es fundamental establecer incentivos, entre otros, para la separación en la fuente que den señales claras a los usuarios del servicio de aseo y consumidores de bienes y servicios para su implementación de esta actividad, estableciendo claramente los componentes mínimos del incentivo y/o impuesto, establecidos en la Constitución. Otros instrumentos económicos deben garantizar la cobertura geográfica total, la evasión y la promoción de reciclaje y el fortalecimiento de las cadenas de valor.
8. Por último, se considera pertinente el desarrollo de un plan nacional para la gestión de los residuos orgánicos.

En conclusión, para garantizar la coherencia y armonía del marco normativo vigente, evitar la regresividad normativa y garantizar una adecuada distribución de competencias entre los ministerios, evitando conflictos entre la prestación del servicio público de aseo y las políticas ambientales, es importante conservar las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cartera que ha demostrado una gestión efectiva en el establecimiento de políticas para la producción y el consumo responsable, implementación de la economía circular, reglamentación de los programas de posconsumo, la gestión de residuos especiales y peligrosos, en el marco de la responsabilidad extendida del productor, entre otros.

Se sugiere la inclusión de plazos más amplios de implementación y evitar la duplicidad de regulaciones en temas como los residuos de construcción y demolición. Se resalta igualmente la inconveniencia de incluir el manejo de puntos críticos en la tarifa de aseo, que requiere una evaluación técnica y fiscal para evitar efectos negativos e incrementos injustificados de este fenómeno.

Así las cosas, el proyecto de ley se considera **INCONVENIENTE CONDICIONADO**, en cuanto podría transitar a conveniente siempre que se tengan en cuenta los ajustes y recomendaciones propuestas, para lo cual, esta cartera se encuentra presta a participar en mesas de trabajo con los autores y ponentes del proyecto y las demás carteras involucradas, para analizar en detalle y ajustar esta iniciativa legislativa, en relación con la estructuración de la gobernanza y la gobernabilidad sobre la gestión integral residuos, la producción y el consumo y la economía circular, así como el mecanismo de coordinación interinstitucional, armonización de las políticas, instrumentación normativa, planes ambientales y demás estrategias adelantadas desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demás entidades competentes, relacionadas con la gestión integral de residuos, direccionadas todas al mejoramiento de la eficiencia en el flujo de materiales y el logro del desarrollo sostenible en el país.